

# ASPECTOS JURÍDICOS DEL MALTRATO

### 1. ASPECTOS JURÍDICOS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

Hasta hace relativamente muy poco las agresiones que las mujeres sufrían en sus casas se consideraban un problema privado de la pareja en el que la sociedad no debía intervenir.

Hoy es difícil no reconocer que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para el disfrute de sus derechos y libertades fundamentales, que atenta contra la **Declaración Universal de los Derechos Humanos**. Sin embargo, no ha sido fácil conseguir este reconocimiento.

En el ámbito internacional y con fundamento en la Carta de las Naciones Unidas, se adoptó en 1979, la **Convención para acabar con todas las formas de Discriminación contra la Mujer**, que en su Artículo 5, obligaba a los Estados partes a tomar medidas apropiadas para la modificación de los patrones socioculturales que den lugar a prejuicios y prácticas que están basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.

La toma de conciencia ha sido larga y laboriosa y ha estado abanderada desde sus orígenes por el movimiento feminista. Las Conferencias Mundiales sobre las Mujeres, desde la de Nairobi (1985) hasta la de Pekín (1995), así como la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la Mujer (Resolución 48/1993), han jugado un papel fundamental en la divulgación del problema.

De la **Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de Naciones Unidas** se desprende la implicación de todos los países en este tema.

Desde los años ochenta, las declaraciones internacionales han contribuido a cambiar esta mentalidad, aunque el reconocimiento de los derechos de las mujeres nunca ha sido fácil. A pesar de que ya en 1980, Naciones Unidas reconoció que la violencia contra las mujeres en el entorno familiar era el crimen encubierto más frecuente en el mundo, no

fue hasta 1993, cuando la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos reconoció los derechos de las mujeres como derechos humanos. Es decir, que sólo desde hace unos pocos años, de los 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos -a partir de la Declaración para la eliminación de la Violencia contra la Mujer- se ha reconocido que los *Estados también son responsables de las violaciones de derechos humanos "de puertas a dentro"*; hasta entonces, se había dado bula a las violaciones y los malos tratos en el hogar.

Según Amnistía Internacional (2002:7) esto tiene implicaciones específicas para los países. Los tratados de derechos humanos establecen obligaciones de parte de los Estados que incluyen:

- Promover los derechos reconocidos convencionalmente
- Asegurar tales derechos para todas las personas y traducirlos en políticas y estrategias.
- Prevenir las violaciones de tales derechos, y
- Proveer remedios efectivos a las víctimas cuyos derechos fueran violados.

En 1995, en la **IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres**, celebrada en Beijing (China), se reconoció que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para la igualdad, el desarrollo y la paz entre los pueblos.

Según la declaración de Naciones Unidas en Beijing la violencia contra las mujeres «es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer y a la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. La violencia contra la mujer a lo largo de su ciclo vital dimana especialmente de pautas culturales, en particular de los efectos perjudiciales de algunas prácticas tradicionales o consuetudinarias y de todos los actos de extremismo relacionados con la raza, el sexo, el idioma o la religión que perpetúan la condición inferior que se le asigna a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad» (ONU, 1995).

La Conferencia estableció una serie de objetivos estratégicos para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres entre los cuales figuran los de introducir sanciones penales, civiles, laborales y administrativas en las legislaciones nacionales, o reforzar las vigentes, con el fin de castigar y reparar los daños causados a las mujeres y niñas víctimas de cualquier tipo de violencia; ofrecer a las víctimas acceso a los sistemas judiciales; adoptar las medidas necesarias, especialmente en el ámbito de la enseñanza, para modificar los modelos de conductas sociales y culturales de mujeres y hombres y, eliminar los prejuicios y prácticas consuetudinarias y de otro tipo basadas en la idea de la inferioridad o la superioridad de uno de los sexos y en funciones estereotipadas asignadas a hombres y mujeres.

La Resolución de la Comisión de Derechos Humanos aprobada en 1997, también por la ONU, «condena todos los actos de violencia sexista, exige la eliminación de la violencia sexista familiar, y en la comunidad y pone de manifiesto el deber de los gobier-

nos de actuar con la necesaria diligencia para prevenir, investigar y castigar los actos de violencia, además de proporcionar a sus víctimas el acceso a unos medios de reparación justos y eficaces.

Después de 5 años, en junio de 2000, la revisión **Beijing+5**, valoró en una Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas, el grado de cumplimiento de los gobiernos de los compromisos adquiridos para remover los obstáculos que dificultaran la igualdad entre hombres y mujeres. La coordinadora de ONGs - 1.200 organizaciones- que se reunió simultáneamente, reconocía un cierto avance en el proceso, pero denunció la falta de voluntad política para acordar un documento más consistente para implementar la Plataforma de Beijing.

La Unión Europea, impulsada por las declaraciones de la ONU, también ha tomado el tema muy en serio en los últimos años y ha puesto en marcha una serie de planes de acción sobre la violencia hacia las mujeres. En 1986, el **Parlamento Europeo** se planteó por primera vez el problema de la violencia contra las mujeres. Mediante la Resolución A-44/86, sobre Agresiones a la Mujer, se abordaba el problema desde diversos puntos de vista: desde las agresiones sexuales y las agresiones en el ámbito privado hasta la prostitución.

En relación con las agresiones en el ámbito privado piden a las autoridades nacionales el desarrollo de programas de formación para todos aquellos profesionales cuyas actividades pudiesen ponerles en contacto con víctimas de agresiones sexuales. La formación se considera interesante para que los profesionales reconozcan los signos de la violencia. También consideraban relevante el que todas las partes involucradas pudiesen reunir de una forma útil información y experiencias, para que la solución de casos individuales se encontrara lo más rápidamente posible.

En esa misma línea, el Parlamento europeo adoptó, en el año 1994, la **Resolución A-0349/94, sobre las violaciones de las libertades y los derechos fundamentales de las mujeres**, en la que se ponía de manifiesto la problemática de la violación de los derechos de las mujeres y tenía en cuenta el derecho de las mujeres a la integridad de su cuerpo. En ella se abordó la problemática de las diferentes costumbres culturales, así como de la violencia contra las mujeres que se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad, como son las violaciones de zonas de conflictos armados, las mujeres de las cárceles, las inmigradas, etc. efectuando diversas recomendaciones sobre los distintos Estados de la Unión Europea.

En esta Resolución se efectúan una serie de pronunciamientos, en forma de petición, a la Comisión y a los Estados miembros, entre los que se encuentra el pedir a los Estados miembros que sus policías presten una atención especial a la situación de las mujeres emigrantes como víctimas de la violencia por razones de sexo. Consideran igualmente importante, adoptar medidas coordinadas para enfrentarse al problema de la violencia contra las mujeres en el ámbito nacional y, por consiguiente, se acoge con satisfacción el establecimiento por parte de algunos Estados miembros de una estrategia entre distintos ministerios para prevenir la violencia y tratar las consecuencias.

En otro de sus puntos, esta Resolución fija la necesidad de que los Estados miembros tomen la iniciativa de elaborar programas escolares destinados a aumentar el nivel de conciencia entre los adolescentes sobre los efectos de la violencia por razón de sexo.

En 1997, el Parlamento Europeo, formuló una **Resolución A4-0250/97, de tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres**. El objetivo de esta campaña consistía en movilizar a la opinión pública, a favor de una actitud de no permitir la violencia, y estaba dirigida a los hombres, ya que su participación activa resulta esencial, para lograr una mayor eficacia. Esta campaña contra la violencia forma parte de las acciones llevadas a cabo para cumplir los compromisos asumidos en la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, de 1995, y acompaña a la designación del año 1999 como Año Europeo contra la violencia hacia las mujeres.

El Tratado de Ámsterdam de 1997 reforzó la obligación de la Unión Europea de respetar los derechos fundamentales y la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. Como consecuencia de ello, la Comisión Europea promovió un primer plan contra la violencia hacia mujeres y niños llamado Iniciativa Daphne, con vigencia hasta 1999.

En el año 2000, la Iniciativa DAPHNE pasó a convertirse en un Programa completo para combatir la violencia contra las mujeres, la infancia y las/los jóvenes (2000-2003). Su objetivo era garantizar la protección de la salud física y psíquica, previniendo la violencia y prestando apoyo a las víctimas, favoreciendo a las ONGs y a otras organizaciones activas en este terreno.

Esta iniciativa ha tenido su continuidad con el programa Daphne II (2003-2007) y Daphne III (2007-2013) mediante la Decisión nº 779/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2007 por la que se adoptó dicho programa y entró en vigor el 3 de julio 2007 (DOUE L173/19 del 3.07.2007) con el objetivo de proteger a los niños y niñas, a la juventud y a las mujeres de todas las formas de violencia tanto en la esfera pública como privada y lograr un elevado nivel de protección de la salud, bienestar y cohesión social. La explotación sexual y la trata de personas están incluidas. Comprende medidas preventivas y apoyo y protección a las víctimas y grupos de riesgo.

Desde la Unión Europea, se da muchísima importancia a los Estados ya que no sólo deben arbitrar medidas, se deben cerciorar de que éstas se orientan a lograr la autonomía de las mujeres. Así, el Consejo de Europa, mediante la Recomendación Rec (2002)5, encomienda a los Estados revisar que las medidas estén centradas en las necesidades de las víctimas y para ello deben introducir, desarrollar o mejorar políticas nacionales contra la violencia y estructuras de asistencia que eviten la victimización secundaria.

A pesar de las posibles limitaciones institucionales, lo que parece evidentes es que un fenómeno tan viejo y conocido como el de la violencia contra las mujeres y los menores, ha empezado a despertar el rechazo social y a ser considerado con verdadero interés por parte de la propia sociedad, así como de los poderes públicos.

Forum como la ONU, la OMS o la UNESCO han reconocido los graves efectos que tiene para la población femenina del mundo la violencia de género, asumiendo (al menos formalmente) la implicación de todas y todos en esta problemática. Más allá de que estas declaraciones impliquen “obligaciones” para los estados de modificar leyes o promover cambios sociales, este reconocimiento permite “romper el silencio” que sobre este tema existía. Actualmente, la violencia contra las mujeres ha superado la dimensión privada y ha pasado a ser considerada como un atentado hacia la propia sociedad, como un ataque a la esencia de la democracia.

## 2. MANDATO CONSTITUCIONAL

La violencia doméstica lesiona una serie de derechos fundamentales que ampara la **Constitución Española**, de 1978. Tal y como señala el Informe “La violencia doméstica contra las mujeres”, del Defensor del Pueblo (1998), hay que tener en cuenta que se habla de derechos fundamentales, de modo que los ciudadanos son sujetos activos de la relación jurídica y los poderes públicos constituyen el sujeto pasivo.

La violencia contra las mujeres vulnera el Artículo 1 que *“propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad ...”*. La violencia doméstica de que la mujer es víctima se sustenta sobre una serie de valores que contradicen esta concepción de igualdad, pensando que ciertos hombres son superiores a sus mujeres y compañeras.

Por otra parte no se debe olvidar que “corresponde a los poderes públicos el promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover todos los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” (**Art. 9.2**).

Por otra parte, la Constitución, de 1978, ha elevado a valor jurídico fundamental la dignidad de la persona y en su **Artículo 10** se puede encontrar: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

También en su **Artículo 15**, puede leerse que *“todas las personas tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que, en ningún caso, puedan ser sometidas a tortura, ni pena o trato inhumano o degradante”*.

En la interpretación de este artículo ha prevalecido el criterio que vincula la idea de “integridad personal” a la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos y degradantes”; por tanto, aunque algunos expertos consideran que la expresión de “malos tratos” debería quedar mejor perfilada en la Constitución, su artículo 15 prohíbe éstos.



### 3. ORDENAMIENTO ESPAÑOL

La ley es un instrumento privilegiado para dar cobertura y garantía a los cambios sociales, por la obligatoriedad que impone para determinadas obligaciones.

En el **Ordenamiento Jurídico Español**, no es hasta 1989, y promovido por los movimientos feministas, cuando se recoge por primera vez, de forma expresa, un precepto por el que se sanciona, por el Código Penal, aquellas conductas causantes de malos tratos en el ámbito doméstico.

Anteriormente, el **Artículo 153** (*"El que habitualmente ejerza violencia física sobre su cónyuge o persona a la que se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad o sobre los hijos propios o del cónyuge o conviviente, pupilos ascendientes o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela o guarda de hecho de uno u otro, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por el resultado que, en cada caso, se causare"*) sanciona la violencia doméstica, aunque no de modo específico, aquella ejercida contra las mujeres.

Tal y como algunos especialistas señalaban, en este artículo se omitían los malos tratos psíquicos como conducta punible, si bien es cierto que este tipo de malos tratos podría quedar encuadrado dentro del **Artículo 173 del Código Penal**, que establece *"el que infligiere a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años"*.

La reforma de 1999 reconoce por primera vez como delito los malos tratos psíquicos. Así el Art. 153 se inicia diciéndole *"El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica...."*.

Además se establece de forma menos ambigua la "habitualidad", refiriéndose a la repetición de actos de violencia acreditados en el tiempo, que según esta nueva ley se aplica cuando se trata de más de dos hechos entre un plazo máximo de tres años.

Los malos tratos que no causan lesión también se sancionan por el **Artículo 617**, son faltas y son castigadas con penas de arresto de tres a seis fines de semana o multa de uno a dos meses.

Algunas de las críticas que se han hecho tanto al artículo 153, como al 617 es la de que no recogen las situaciones en las que el agresor haya tenido relación matrimonial o de convivencia con la víctima, de manera que quedan fuera todos aquellos ex maridos o ex compañeros que causan malos tratos a la mujer con la que convivieron. Lo positivo del Artículo 617, es que prevé sancionar los malos tratos sin causar lesión no definida como delito, lo que se conoce como "falta". De modo literal este artículo indica que "el que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no definida como delito en este Código [penal], será castigado con la pena de arresto de tres a seis fines de semana o con multa de uno a dos meses". El problema es que, al sancionar este comportamiento con multa, esta sanción repercute negativamente en la víctima, al abonarse el importe con el patrimonio de la propia unidad familiar.

Estas críticas que venían haciendo las asociaciones de mujeres a las penas de multa son recogidas finalmente por el legislador, en la Reforma de 1995, lo cual dará pie al juez a estimar la situación económica familiar concreta para no perjudicar a la propia víctima, quedando la redacción del Art. 617 como sigue: *«Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere en el Art. 153, la pena será la de arresto de tres a seis fines de semana o la de multa de uno a dos meses, teniendo en cuenta la repercusión económica que la pena impuesta pudiera tener sobre la propia víctima o sobre el conjunto de los integrantes de la unidad familiar.»* (Art. 617.2, CP).

La reforma de 1999 añade una segunda parte al artículo 617, CP a través de la cual se posibilita que el juez tome medidas de prevención de la violencia mediante el alejamiento del agresor: *«... los jueces o tribunales podrán acordar en sus sentencias, a petición de la víctima, la prohibición de que el reo se aproxime al ofendido o se comuniquen con él o con su familia, así como la prohibición de que el reo vuelva al lugar en el que se ha cometido la falta o acuda a aquél en que resida la víctima o su familia si fueren distintos por tiempo de tres meses a un año.»* (Art. 617, CP).

Lo positivo del juicio de faltas es su simplicidad y rapidez, puesto que el juez instructor ha de citar inmediatamente a juicio a denunciante y denunciado. Una de las notas que caracterizan a las agresiones que se producen en el ámbito familiar es la dificultad de obtener pruebas de las mismas que permitan fundamentar una sentencia condenatoria. Con frecuencia no hay más testigos que la víctima y los hijos. En la mayoría de los juicios de faltas no se practican otras pruebas que no sean la declaración de la víctima y el agresor. Si hubiera pruebas, como un informe médico, un "parte de sesiones", una cinta magnetofónica, informes policiales, cartas del agresor conteniendo amenazas, etc., es la propia víctima la que lo debe aportar.

Por otra parte, el testimonio de la víctima es una prueba fundamental. El testimonio de la víctima es considerado en la jurisprudencia como prueba suficiente por sí sola para destruir la presunción de inocencia y fundamentar una sentencia condenatoria. La Asociación de Mujeres Juristas Themis, cita tres requisitos que el tribunal Supremo exige para dar credibilidad a un testimonio: primero, la inexistencia de un móvil subjetivo en la víctima, como enemistad o rencor; segundo, que aparezcan probados otros hechos periféricos a la agresión, de la que se deduzca la veracidad del testimonio de la agredida y tercero, persistencia en la incriminación en el tiempo, sin ambigüedad, ni contradicciones.

Otras respuestas legales se pueden encontrar en el **Código Civil** - Art. 92, 102, 103 y 104- y en la **Ley de Enjuiciamiento Criminal** - Art. 13-. En 1999, tanto el Código Penal, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal han sido modificadas para endurecer las medidas, y además, se ha eliminado de ésta última un párrafo que establecía la obligatoriedad de la obediencia de la mujer hacia su marido.

Las juristas mantienen que la aplicación del derecho penal por sí sólo no es el instrumento para la erradicación de la violencia de género. El endurecimiento de las penas no tiene prácticamente trascendencia en el número de agresiones, pero si lo tienen las

medidas de alejamiento, sean cautelares o penas accesorias, respecto a la seguridad de la víctima (Sánchez y Carrasco, 2001:138). Las medidas cautelares son aquellas que puede adoptar el juez tras la denuncia, antes de recaer sentencia firme, para asegurar la protección de la víctima. Entre ellas figura la conocida como “alejamiento”, Art. 544 bis: prohibición de residir en determinados lugares, barrios, ciudades, provincias o Comunidad Autónoma, etc; prohibición de acudir a determinados lugares, ciudades, etc. y prohibición de aproximarse o comunicarse con determinadas personas. El problema de estas medidas es que no se aplican correctamente. Según la Federación de Mujeres Maltratadas los jueces están prohibiendo a los maltratadores acercarse cincuenta metros a la víctima.

#### MODALIDADES DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SU TIPIFICACIÓN EN EL CÓDIGO PENAL ANTERIORES A LOS ÚLTIMOS AVANCES LEGISLATIVOS

MOD. DE VIOLENCIA	MANIFESTACIONES HABITUALES	TIPIFICACIÓN EN EL CÓDIGO PENAL
FÍSICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Golpes, mordeduras, empujones, estrangulamientos.</li> <li>• Agresiones con armas y objetos lesivos.</li> <li>• Impedir a la víctima su libre movimiento.</li> <li>• Omisión de cuidado o socorro en situaciones de riesgo para la salud de la víctima</li> </ul>	<p><i>Delitos:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Homicidio y asesinato (138, 139, 140)</li> <li>• Delito de lesión física (147.1)</li> <li>• Delito de violencia habitual (153)</li> <li>• Delito de detención ilegal (163)</li> </ul> <p><i>Faltas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Falta de lesiones (617.1)</li> <li>• Falta de maltrato de obra (617.2)</li> </ul>
PSÍQUICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Críticas y humillaciones.</li> <li>• Desvalorización de actos y opiniones.</li> <li>• Amenazas de dañar a la víctima               <ul style="list-style-type: none"> <li>- familiares, amenaza de abandono</li> <li>- infidelidad.</li> </ul> </li> <li>• Conductas destructivas referidas a objetos valorados por la víctima.</li> <li>• Culpabilización de la violencia a la propia víctima.</li> <li>• Control patriarcal; exigencias de servicio y reproches por descuido doméstico.</li> <li>• Control de salidas, amistades, dinero, bienes personales, capacidad de decisión, trabas al estudio y al trabajo.</li> <li>• Indiferencia y negligencia respecto a deseos y necesidades de la víctima.</li> </ul>	<p><i>Delitos:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Delito de violencia habitual (153)</li> <li>• Delito de amenazas (169)</li> <li>• Delito de injurias (208)</li> <li>• Delito de trato degradante (173)</li> <li>• Delito de coacciones (172)</li> </ul> <p><i>Faltas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Falta de amenazas (620)</li> <li>• Falta de injurias (620)</li> <li>• Falta de vejación injusta (620)</li> <li>• Falta de coacciones (620)</li> </ul>
SEXUAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligar a tener relaciones sexuales no deseadas o a prácticas no queridas mediante amenazas.</li> <li>• Obligar a tener relaciones sexuales tras una agresión física o psíquica.</li> </ul>	<p><i>Delitos:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agresión sexual (178, 179, 180.4)</li> <li>• Abuso sexual (181, 182)</li> </ul>

FUENTE: Alberdi y Matas (2002:171)



#### 4. MINISTERIO DE IGUALDAD Y AVANCES LEGISLATIVOS EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El Ministerio de Igualdad es el departamento de la Administración General del Estado al que corresponde la propuesta y ejecución de las políticas del Gobierno en materia de igualdad, eliminación de toda clase de discriminación de las personas por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación sexual, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, y erradicación de la violencia de género, así como en materia de juventud. Le corresponde, en particular, la elaboración y desarrollo de las normas, actuaciones y medidas dirigidas a asegurar la igualdad de trato y de oportunidades, especialmente entre mujeres y hombres, y el fomento de la participación social y política de las mujeres.

La distancia que existe entre la igualdad legal y la igualdad real hace necesario que los poderes públicos pongan en marcha políticas públicas orientadas a superar la discriminación y garantizar la igualdad. La Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres establece el fundamento jurídico para avanzar hacia la efectiva igualdad en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural y política. Su aplicación requiere de un Plan Estratégico que concrete los objetivos, ámbitos y medidas de actuación en los que los poderes públicos han de centrar sus acciones (Art. 17 de la LOIEMH). La coordinación entre los distintos niveles de las Administraciones Públicas (general, autonómica y local) y los distintos estamentos sociales hace necesario, asimismo, la elaboración de dicho Plan Estratégico.

El Plan Estratégico (2009-2011) desarrolla cuatro principios rectores: Ciudadanía, Empoderamiento, Transversalidad e Innovación, que están, además, relacionados entre sí.

**1. La redefinición del modelo de ciudadanía** en concordancia con la igualdad de género, que entiende la igualdad más allá de la equiparación de lo femenino con lo masculino y considera lo femenino como riqueza; que afirma la libertad femenina y atiende a la singularidad y pluralidad de las mujeres, de modo que no se las contemple como "lo colectivo femenino".

**2. El empoderamiento de las mujeres**, en el sentido de valorar y fortalecer sus formas de hacer, de ejercer el poder y de relacionarse. El concepto de empoderamiento posee una doble vertiente. Por una parte, se refiere a la capacidad de las mujeres para acceder a aquellos puestos donde se toman decisiones. Por otra, a la revalorización de la aportación de las mujeres.

**3. La transversalidad de la perspectiva de género**, como herramienta que busca modificar las formas actuales de la política, de modo que se tomen como referencia las experiencias, las aportaciones de las mujeres, su modo de estar en el mundo y su conocimiento.

**4. La innovación** científica y tecnológica, como una de las principales fuerzas de cambio social. Aunque su dominio confiere un enorme poder, ya que quien controla la tecnología controla el futuro, las mujeres han estado excluidas de dichos ámbitos por medio de barreras formales e informales.

Estos cuatro principios van a ordenar y articular el contenido del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2009-2011) a lo largo de doce Ejes que componen el contenido del Plan.

Estos doce Ejes son:

1. Participación Política y Social
2. Participación Económica
3. Corresponsabilidad
4. Educación
5. Innovación
6. Conocimiento
7. Salud
8. Imagen
9. Atención a la Diversidad e Inclusión Social
10. Violencia
11. Política exterior y de cooperación para el desarrollo
12. Tutela del derecho a la igualdad

Para cada uno de estos Ejes, se establece un marco teórico explicativo, un diagnóstico sobre la situación actual en España, los objetivos estratégicos y las propuestas de actuación.

En los últimos años se han producido en el derecho español avances legislativos en materia de lucha contra la violencia de género, tales como la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de Medidas Concretas en Materia de Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de los Extranjeros; la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, o la Ley 27/2003, de 31 de julio, Reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica; además de las leyes aprobadas por diversas Comunidades Autónomas, dentro de su ámbito competencial. Todas ellas han incidido en distintos ámbitos civiles, penales, sociales o educativos a través de sus respectivas normativas.

#### **4.1. Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de Medidas Concretas en Materia de Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de los Extranjeros**

Esta ley orgánica viene a completar el conjunto de medidas legislativas que sirven de desarrollo al Plan de lucha contra la delincuencia, presentado por el Gobierno el día 12 de septiembre de 2002. Este Plan contemplaba un conjunto de actuaciones para fortale-

cer la seguridad ciudadana, combatir la violencia doméstica y favorecer la integración social de los extranjeros.

Respecto a la violencia doméstica, la Ley incluye medidas legislativas centradas en los aspectos represivos. La Ley sólo supone una modificación del Código Penal, en el sentido de incrementar las penas. Así, las conductas que eran consideradas en el Código Penal como falta de lesiones, cuando se cometen en el ámbito doméstico pasan a considerarse delitos, con lo cual se abre la posibilidad de imponer pena de prisión y, en todo caso, la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

Se dota de una mejor sistemática a los delitos de violencia doméstica cometidos con habitualidad; se amplía el ámbito de las víctimas y se abre la posibilidad de que el juez acuerde la privación de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento.

La Ley 11/2003 se concreta respecto a la violencia conyugal contra las mujeres en la modificación de los artículos 153 y 173. El artículo 153 queda redactado como sigue:

«El que por cualquier medio o procedimiento causara a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeará o maltratará de obra a otro sin causarle lesión, o amenazara a otro de modo leve con armas y otros instrumentos peligrosos, cuando en todos estos casos el ofendido fuera alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de uno a tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de seis meses a tres años.

Se impondrán las penas en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.»

También se modifica el artículo 173, que queda redactado como sigue:

*«1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.*

*2. El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de dos a cinco años y, en su caso, cuando el juez o*

*tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos o faltas en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica.*

*Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los actos de violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza.*

*3. Para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores.»*

## 4.2. Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre

Mediante esta Ley se modificaba el Código Penal vigente, adaptando las penas a los tipos de delitos ya existentes e introduciendo nuevas figuras delictivas, de acuerdo con las más acuciantes preocupaciones sociales.

Algunas de las reformas más destacables en la parte general del Código Penal son las siguientes:

- a) La duración mínima de la pena de prisión pasa de seis a tres meses.
- b) Se establece en cinco años la duración de la pena que permite distinguir entre la grave de prisión y la menos grave.
- c) Se suprime la pena de arresto de fin de semana, cuya aplicación práctica no ha sido satisfactoria, sustituyéndose, según los casos, por la pena de prisión de corta duración —de tres meses en adelante en los delitos—, por la pena de trabajo en beneficio de la comunidad o por la pena de localización permanente, que se crea en esta ley orgánica.

Y, en concreto, **respecto a la violencia doméstica** se amplía la duración máxima de las penas de alejamiento y de no aproximación a la víctima, incluyéndose la previsión de su cumplimiento simultáneo con la de prisión e incluso concluida la pena, para evitar el acercamiento durante los permisos de salida u otros beneficios penitenciarios o después de su cumplimiento.

Se establecen por separado las tres modalidades existentes en la actualidad, con el fin de que se pueda imponer la que corresponda a la verdadera naturaleza del delito:

- la prohibición de residir y acudir a determinados lugares,
- la prohibición de aproximación a la víctima u otras personas y

- la prohibición de comunicación con la víctima u otras personas.

Y, por último, se establece la posible suspensión del régimen de visitas, comunicación y estancia de los hijos, así como la prohibición de comunicaciones por medios informáticos o telemáticos.

Esta Ley también modifica algunos aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como, el apartado 1 del artículo 544 ter, que, queda redactado del siguiente modo:

«El Juez de Instrucción dictará **orden de protección para las víctimas** de violencia doméstica en los casos en que, existiendo indicios fundados de la comisión de un delito o falta contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de alguna de las personas mencionadas en el artículo 173.2 del Código Penal, resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las medidas de protección reguladas en este artículo.»

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, señala que la orden de protección será acordada por el juez de oficio o a instancia de la víctima, o persona que tenga con ella alguna de las relaciones indicadas en el apartado anterior, o del Ministerio Fiscal.

#### **4.3. Ley 27/2003, de 31 de julio, Reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica**

La Ley 27/2003, de 31 de julio, Reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, sigue las recomendaciones del Comité de Ministros de Consejo de Europa (2002)<sup>5</sup>. El Consejo de Europa, para una mejor protección de las mujeres víctimas de violencia, recomienda a los Estados introducir, desarrollar y/o mejorar las políticas nacionales con base en los siguientes elementos:

- la seguridad máxima y protección de las víctimas;
- el fortalecimiento de la capacidad de asistir a las mujeres víctimas de violencia mediante la puesta en práctica de estructuras de asistencia óptimas que eviten una victimización secundaria;
- la adecuación del Derecho Civil y Penal, incluidos los procedimientos y la formación especializada de los profesionales.

Esta Ley de Orden de protección supuso un importante avance en la lucha contra la violencia conyugal contra las mujeres porque unificó, a partir de una sola solicitud, los diferentes instrumentos de protección de la víctima previstos en el ordenamiento jurídico (penales, civiles y de protección y asistencia social).

La Ley de Orden de Protección se configuró sobre la base de seis principios:

- Principio de protección de la víctima y de la familia, que es en realidad la razón de ser de las órdenes de protección (proteger la integridad de la víctima y de la familia frente al agresor).



- Principio de aplicación general tanto para actos constitutivos de delitos como de faltas.
- Principio de urgencia en cuanto la orden de protección debe obtenerse y ejecutarse con la mayor celeridad posible.
- Principio de accesibilidad al procedimiento a la vez que el procedimiento sea sencillo.
- Principio de integridad en cuanto la concesión de una orden de protección debe activar una acción de tutela que concentre medidas de naturaleza penal, civil y de protección social.
- Principio de utilidad procesal en cuanto una orden de protección debe facilitar la acción judicial y el subsiguiente proceso de instrucción.

Una Orden de Protección es una resolución judicial que, constatando la existencia de una situación objetiva de riesgo, ordena la protección de la víctima de un delito ó falta de violencia doméstica y otorga a la víctima un estatuto integral de protección que comprende medidas civiles, penales y asistenciales y de protección social.

Por tanto, cada Orden de Protección está ligada a un concreto proceso penal por delito o falta.

En el proceso de la Orden de Protección hay fases:

#### *1ª Fase o inicial:*

El procedimiento se inicia con la solicitud de la orden de protección.

La orden de protección la puede solicitar la víctima o aquellas personas que tengan con ella alguna de las relaciones de parentesco o afectividad a que se refiere el artículo 153 del Código Penal; las entidades u organismos asistenciales que tuvieran conocimiento de alguno de los hechos que fundamenten una orden de protección deberán ponerlos en conocimiento del Juez de guardia o del Ministerio Fiscal que pueden incoar o instar el procedimiento.

Esta solicitud se presenta en un modelo normalizado que pretende ser sencillo para que cualquier persona lo pueda cumplimentar y accesible ya que puede encontrarse en cualquier Comisaría de Policía (nacional, autonómica o local) o Guardia Civil; en el Juzgado o Fiscalía; en las Oficinas de Atención a la Víctima, en los servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las Administraciones Públicas o en los servicios de Orientación jurídica de los colegios de abogados.

A la hora de presentar una Orden de protección ante el Juez de Guardia es aconsejable que llegue acompañada con el atestado de la policía Judicial.

La Ley ofrece varias posibilidades para presentar la solicitud, pero según la Comisión de Seguimiento de la Implantación de la Orden de protección (integrada por representantes del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las

Comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España), la experiencia demuestra que, en la generalidad de los casos, las víctimas presentan la denuncia en dependencias policiales o en el propio juzgado.

Sería conveniente que la víctima estuviera acompañada por una profesional al cumplimentar la solicitud de la orden, e incluso al presentarla ante la Policía.

Una vez recibida la solicitud de orden de protección en el Juzgado de Guardia se pueden producir dos situaciones:

- a) Si los hechos son constitutivos de falta, artículo 964.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se permite la celebración de juicio rápido.
- b) Si los hechos son constitutivos de delito, el Juez convocará audiencia en 72 horas para resolver la solicitud presentada y convocará a la víctima, al solicitante, al agresor y al Fiscal para celebrar "juicio rápido".

## *2ª Fase o de adopción de la Orden de Protección.*

Se concede una orden de protección cuando el juez de Guardia lo considera procedente. Para que se considere procedente es necesario que existan indicios fundados de comisión de un delito o falta de violencia doméstica y se dé una situación objetiva de riesgo para la víctima. A partir de aquí, atendiendo a la gravedad de los hechos y la necesidad de protección integral, el juez podrá adoptar medidas cautelares (prisión provisional, prohibición de aproximación, prohibición de residencia, prohibición de comunicación, retirada de las armas o cualquier otra).

Atendiendo a la necesidad de protección integral e inmediata de la víctima se ponen en marcha medidas penales y civiles, así como se activan medidas de protección social. En este último caso resulta fundamental la coordinación de las distintas fuerzas y cuerpos de Seguridad.

Además se establecen los mecanismos adecuados para el control y seguimiento de la aplicación de la Orden y se hace saber que el incumplimiento de alguna de las medidas podrá dar lugar a la detención del inculcado, al haber cometido el delito de quebranto de medida cautelar (artículo 468 del Código Penal).

Una aspecto importante respecto a las medidas penales es que a la hora de solicitar la Orden de Protección, la víctima o el fiscal deben solicitar medidas civiles en el caso de que existan hijos menores o incapaces.

Por tanto las medidas civiles deben ser solicitadas de manera expresa y pueden consistir en: atribución de uso y disfrute de la vivienda, régimen de custodia, visitas y comunicación con los hijos (puntos de encuentro familiar), prestación de alimentos, y medidas de protección al menor para evitar un peligro ó perjuicio.

La vigencia de las medidas civiles es de 30 días y si fuera incoado un proceso de familia en vigor durante treinta días más. Al final del cual puede ser ratificado, modificado o quedar sin efecto.

Finalmente, la notificación la realizarán las partes y Fiscal, a la víctima, a la Oficina de Atención a la Víctima, al punto de coordinación, a la Policía Judicial y a la Administración Penitenciaria.

Toda modificación de la situación procesal y penitenciaria del agresor será comunicada a la víctima y a la Policía. Además la notificación será inscrita en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, creado por la Instrucción 3/2003 del Consejo General del Poder Judicial, impulsando la efectiva compartición de la información.

## **5. LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO**

### **5.1. La aprobación de la Ley**

En cuanto a las actuaciones de las Administraciones Públicas, la Ley estuvo precedida por el II Planes Integrales contra la Violencia Doméstica, que se describen en el tema siguiente.

La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, conocida popularmente como Ley Integral, fue la primera aprobada en Consejo de Ministros por el Gobierno socialista y, además, fue aprobada en el Congreso por unanimidad.

Según la Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, (Revista Temas 133; 2005:15 y 16) con esta Ley "se trataba de trasladar la democracia al ámbito privado, porque había habido antes cambios jurídicos, pero éstos no se insertaban en un marco jurídico que hubiera incorporado la perspectiva de género en su estructura, ni como criterio interpretativo".

Desde el ejecutivo fueron conscientes de que el camino de la igualdad entre hombres y mujeres necesitaba de cambios estructurales y para ello era imprescindible luchar contra un clima social que seguía siendo tolerantes con la violencia que se ejerce contra las mujeres, clara secuela de una ideología patriarcal y machista.

Esta Ley trató de dar una respuesta legal a las demandas de una sociedad muy sensible a la violencia contra las mujeres. De hecho, en el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, de marzo de 2004, la violencia contra las mujeres ocupaba la quinta posición en las opiniones de los y las españolas sobre los principales problemas de este País. Por tanto, en palabras de Matilde Fernández Sanz (Revista Temas 133; 2005:20), la ley 1/2004 era el final de una larga y comprometida etapa de la sociedad española, especialmente de las mujeres progresistas y feministas, a la vez que el principio de un nuevo periodo de trabajo en la consolidación de los derechos humanos.

Si bien, la Ley ha recogido una respuesta social y ha sido la consecución de un logro para algunas asociaciones de mujeres, que la presentan como modelo en Europa, pues

es la única que, junto con la sueca, utiliza el concepto de "violencia de género" y hace comprensible la violencia contra las mujeres como un componente estructural y estructurante del modelo social (María Durán;2005:23-26); también se han manifestado determinadas posiciones frente a ella.

Desde posiciones estrictamente legales se ha puesto en cuestión la constitucionalidad de la Ley por parte de algunos miembros del Consejo General del Poder Judicial por la elevación de las penas de amenazas y coacciones leves cuando se producen hacia una mujer; mientras no se da el mismo tratamiento a los hombres. La Ley Integral en sus artículos 38 y 39, respectivamente señala la necesidad de incluir tres apartados nuevos en el artículo 171 del Código Penal: "la protección contra las amenazas leves cuando se ejerzan sobre su esposa o mujer o haya estado la víctima ligada a él por una análoga relación de afectividad" y la modificación del artículo 172: "el que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él".

Esta medida, considerada una acción positiva por parte de las redactoras de la Ley, está siendo estudiada por el Tribunal Constitucional. Después de diez meses de funcionamiento de la Ley, Éste ha aceptado a trámite una denuncia sobre la inconstitucionalidad de la misma. Y probablemente la polémica continúe.

Pero también desde otros ámbitos feministas, que no han estado tan implicados en la elaboración de la misma, se cuestiona una ley que atribuye la violencia de género a un único factor: los deseos de dominación masculina. Esta posición la resumía Paloma Uría en las Jornadas de Pensamiento Crítico, de diciembre de 2005. Según Uría, esta concepción parte de un pensamiento feminista simplificador que tiende a presentar a los hombres y a las mujeres como dos naturalezas blindadas y opuestas: las mujeres víctimas; los hombres verdugos.

La Ley insiste en una especie de impulso masculino de dominio como causa única, pero también deberíamos pensar en la estructura familiar (núcleo de privacidad y de tensiones, lugar de riesgo aunque pensemos que es un remanso de paz), en el papel de la educación religiosa y sus mensajes, en el concepto del amor romántico que tenemos donde todo se sacrifica, en la escasa habilidad para resolver conflictos, y en la carencia de aprendizaje en la negociación y el afecto).

No se cuestionan algunas instituciones: las religiosas o el mercado de trabajo por ejemplo, cuando en el mercado laboral se sigue reproduciendo la discriminación y mostrando el menor valor de las mujeres, puesto que las mujeres siguen cobrando menos, haciendo los peores trabajos, ocupando los peores puestos, pagando muy caro el deseo de maternidad, etc. Además, para atender a las mujeres maltratadas se siguen contratando a mujeres, porque son las que se dedican mayoritariamente a la asistencia y el cuidado de las personas y éstas están contratadas por empresas contratadas, no por el Estado o por las Comunidades Autónomas, con condiciones laborales precarias, con jornadas reducidas, etc... Lo que implica entre otros aspectos el que el personal varíe y la misma mujer que ha sufrido violencia tenga que repetir su historia al nuevo personal.

## 5.2. Algunos aspectos relevantes sobre la Ley

Esta Ley utiliza el término de violencia de género para señalar que esta violencia es el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad, dirigida contra las mujeres por el hecho mismo de serlo. Y, por tanto la entiende como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.

Por violencia de género se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño ó sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción ó la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.

Varios son los aspectos positivos de esta Ley:

- ❖ Los poderes públicos se muestran obligados a atender la violencia contra las mujeres y además entienden que ésta es uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución.

El derecho a la libertad y la dignidad, en definitiva a vivir sin violencia se recoge en varios artículos de la Constitución Española:

- ☐ En el Artículo 15 está el derecho a la vida e integridad física y moral.
- ☐ En el Artículo 43 figura el derecho a la salud física y psíquica.
- ☐ En el Artículo 17 a la libertad y seguridad.
- ☐ En el 14 se menciona el derecho a la igualdad y no discriminación.
- ☐ En el 24 está reflejado el derecho a la tutela efectiva.

Por tanto la Ley 1/2004 se redacta para hacer efectivos esos derechos ya que entiende que la violencia de género es una violación de todos ellos.

- ❖ La Ley pretende atender a las recomendaciones de los organismos internacionales en el sentido de proporcionar una respuesta global a la violencia que se ejerce sobre las mujeres; y contempla entre las medidas de protección actuaciones integrales cuya finalidad es:

- ☐ Prevenir,
- ☐ Sancionar
- ☐ Erradicar esta violencia y
- ☐ Prestar asistencia a sus víctimas.

- ❖ Pretender unir leyes, normas, planes y programas que estaban dispersos y con ello, al menos, en espíritu se pretende que exista más coordinación entre los departamentos, instituciones y personal que debe atender a las mujeres -víctimas- y también a los menores -víctimas directas o indirectas-.



- ❖ Además, al menos en el enunciado, pretende incidir a partir de procesos de socialización y educación.
- ❖ Se plantea como derecho de las mujeres el recibir atención, información, recursos, etc. No es una ayuda graciable, es un derecho que las mujeres tienen y en cambio el Estado tiene unas obligaciones.

La Ley tiene por **objeto** actuar contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia.

Por tanto, aunque su denominación es Ley Integral contra la Violencia de Género, sólo contempla uno de los tipos específicos de violencia contra las mujeres: la violencia conyugal contra la mujer. Quedan fuera el resto de agresiones y también el resto de sujetos que dentro de un hogar pueden ser agredidos: madres, hijas, hermanas, etc.

Los **Principios rectores** son:

- 1.- Fortalecer las medidas de sensibilización de prevención dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, sanitario, de los servicios sociales, publicitario y mediático.
- 2.- Consagrar derechos de las mujeres víctimas, exigibles ante las Administraciones públicas. Procurando un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios.
- 2.- Garantizar derechos laborales y funcionariales y derechos económicos.
- 3.- Establecer un sistema integral de tutela institucional.
- 4.- Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral.
- 5.- Coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos. Reforzando los servicios de información, apoyo, atención, recuperación integral y emergencia.
- 6.- Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que desde la sociedad civil actúan contra la violencia de género.
- 7.- Fortalecer la especialización de los colectivos profesionales.
- 8.- Garantizar el principio de transversalidad de las medidas.

### 5.3. Medidas en materia de sensibilización y educación

El título 1 es de **medidas de sensibilización**, prevención y detección.

Entre las medidas de sensibilización, la Ley contempla la puesta en marcha de un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género. A lo que se unirán las campañas de información y sensibilización que los distintos poderes públicos impulsarán, cada uno en el marco de sus competencias.



En el capítulo 2 sobre publicidad y medios de comunicación, califica como ilícita toda publicidad que utilice la imagen de la mujer de manera vejatoria o discriminatoria. Y la Delegación de Gobierno contra la violencia, el Instituto de la Mujer y los órganos competentes de las CC.AA, el Ministerio Fiscal y las Asociaciones de Defensa de la Mujer podrán ejercitar ante los Tribunales la acción de casación y rectificación de la publicidad ilícita.

Las actuaciones en **materia educativa** figuran en el capítulo 2. Destacan por un lado, los principio y valores que deben impregnar el sistema educativo y por otro, una serie concreta de actuaciones.

❖ Respecto a los valores que deben incorporarse en todos los niveles educativos figura:

- ☐ El aprendizaje en la resolución pacífica de los conflictos.
- ☐ Comprender y respetar la igualdad entre sexos.
- ☐ Consolidar en el alumnado su madurez personal, social y moral para actuar autónomamente.
- ☐ Analizar las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y efectiva.
- ☐ Fomentar el respeto a la dignidad de las personas.
- ☐ Formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal.

❖ En cuanto a las medidas incluye las siguientes:

- ☐ Escolarización inmediata en caso de violencia de género.
- ☐ Eliminación de estereotipos sexistas o discriminatorios de los textos.
- ☐ Formación inicial y permanente del profesorado en materia de igualdad, prevención y resolución de conflictos y detección precoz de la violencia en el ámbito familiar.
- ☐ Participación en el Consejo Escolar del Estado del Instituto de la Mujer y de las organizaciones que defienden los intereses de las mujeres.
- ☐ Implicación de la inspección educativa, puesto que ésta debe velar por el cumplimiento y aplicación de todo lo expuesto.

Estas medidas entrañan la necesidad de modificación de Leyes:

- En la Disposición adicional tercera, se modifica la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación.
- En la Disposición adicional cuarta, se modifica la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo.
- En la Disposición adicional cuarta, se modifica la Ley Orgánica de Calidad de la Educación.

La Ley también incluye medidas en el ámbito sanitario para la sensibilización y formación y apuesta por la detección precoz de la violencia de género, para lo cual se desa-



rollarán programas de sensibilización y formación del personal sanitario y se incorporarán contenidos preventivos en los currícula de las licenciaturas y diplomaturas de las profesiones sociosanitarias.

Dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se crea una Comisión Contra la Violencia de Género que apoye y oriente la planificación de medidas sanitarias y que, posteriormente, evalúe su funcionamiento y haga propuestas.

#### 5.4. Los derechos de las víctimas

El título II de los **derechos de las mujeres víctimas de violencia de género** es el capítulo más novedoso porque es aquí donde se incorpora la idea de derecho de las mujeres. No se entiende la atención, la información, la asesoría jurídica como una asistencia graciable, sino como unos derechos a los que todas las mujeres víctimas de violencia de género- con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (art. 17)- deben tener acceso.

Sin embargo, esta universalidad de la norma choca frecuentemente con la realidad. En noviembre de 2005, Amnistía Internacional, lanzó la campaña "Inmigrantes indocumentadas ¿hasta cuándo sin protección frente a la violencia de género?", mediante la cual denunciaban que no se está cumpliendo ni el artículo 17.1, ni el 30.2 -"se considerará de forma especial la situación de las mujeres que, por sus circunstancias personales y sociales, puedan tener mayor riesgo de sufrir la violencia de género o mayores dificultades para acceder a los servicios previstos en esta Ley, tales como las pertenecientes a minorías, las inmigrantes, las que se encuentran en situación de exclusión social o las mujeres con discapacidad"-.

Además, determinadas disposiciones, posteriormente dictadas, como la Instrucción 14/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre actuaciones en dependencias policiales en relación con mujeres extranjeras víctimas de violencia de doméstica o de género, son incompatibles con la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de Género.

La Ley recoge varios derechos:

- ❖ A la información
- ❖ A la asistencia social integral
- ❖ A la asistencia jurídica
- ❖ Laborales y prestaciones de la Seguridad Social.
- ❖ Económicos

Las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir información y asesoramiento adecuado a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las Administraciones públicas. También tienen derecho a servicios de emergencia, de apoyo y de recuperación integral (donde se les informará, atenderá psicológicamente,

se les dará apoyo social y educativo a la unidad familiar, apoyo a la formación e inserción laboral y formación en valores de igualdad).

También los menores que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida tendrán estos derechos.

Las mujeres que acrediten insuficientes recursos para litigar disponen de defensa gratuita tanto de abogado como de procurador.

En el Artículo 21 se recogen los derechos laborales y prestaciones a la Seguridad Social. La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho a:

- la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo,
- a la movilidad geográfica,
- al cambio de centro de trabajo,
- a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y
- a la extinción del contrato de trabajo (la suspensión o extinción del contrato de trabajo darán lugar a situación legal de desempleo y el tiempo de suspensión se considerará como periodo de cotización efectiva a todos los efectos de las prestaciones de Seguridad social y de desempleo).

Para que estos derechos tengan efecto, la Ley dispone la modificación, de los artículos 37, 45, 48, 49, 52 y 55 del Estatuto de los Trabajadores, así como la Ley General de la Seguridad Social y la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

La forma de acreditar la situación de violencia de género tanto para conseguir que se le apliquen los derechos laborales a las trabajadoras y/o funcionarias y los derechos económicos es la presentación de la orden de protección.

La víctima de violencia de género, que careciese de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, y por su edad, falta de preparación general y circunstancias sociales puede tener especiales dificultades para obtener un empleo, podrá recibir una ayuda, en un único pago igual a 6 meses de subsidio de desempleo; a 12 meses si padece alguna minusvalía y a 18 si tiene responsabilidades familiares.

También serán las mujeres víctimas de violencia consideradas colectivo prioritario en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores.

## 5.5. Tutela institucional y penal

Además de la puesta en marcha de la Comisión para la Prevención de la Violencia de Género en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que ya se ha mencionado, se crean:

La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a la que corresponderá, entre otras funciones,

proponer la política del Gobierno en relación con la violencia sobre la mujer y coordinar e impulsar todas las actuaciones que se realicen en dicha materia.

También se crea el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, como un órgano colegiado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y que tendrá como principales funciones servir como centro de análisis de la situación y evolución de la violencia sobre la mujer, así como asesorar y colaborar con la Delegación en la elaboración de propuestas y medidas para erradicar este tipo de violencia.

En cuanto a la tutela penal, se agrava la pena de lesiones que podrá ser castigada de 2 a 5 años. Y las amenazas leves y coacciones leves, cuando sean contra la esposa o mujer que esté o haya estado ligada a el agresor por una análoga relación afectiva, podrán ser castigadas con penas de 6 meses a 1 año de prisión o con trabajos en beneficio de la comunidad (31 a 80 días), privación del derecho de tenencia de armas y, a criterio judicial, inhabilitación patria potestad, guarda, etc. Estas mismas penas le serán impuesta a quien amenace, de modo leve, a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

También serán castigados con penas de 6 meses a 1 año, aquellos que quebranten la condena o las medidas cautelares.

Por el artículo 43, se regula la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer con competencias penales. Estos Juzgados tienen competencias para instruir delitos de homicidios, abortos, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexual o cualquier otro cometido con violencia o intimidación siempre que se cometa contra quien haya sido su esposa. También son competentes para adoptar las correspondientes órdenes de protección y determinar el fallo de las faltas.

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tendrán de forma exclusiva y excluyente competencias en el orden civil cuando se trate de asuntos de filiación, maternidad, paternidad, nulidad matrimonial, separación o divorcio, relaciones paterno-filiales, adopción de medidas familiares, guarda y custodia y alimentos, asentimiento en la adopción y oposición a resoluciones administrativas en materia de protección de menores, siempre:

- Que alguna de las partes sea víctima de los actos de violencia de género.
- Que alguna parte sea imputada como autor o inductor o cooperador de un acto de violencia de género.
- Cuando se haya adoptado una orden de protección.

Para que la aplicación de la Ley no choque con ausencia de formación en la materia, la propia Ley prevé la formación de Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Médicos Forenses. Pero además define el diseño que han de tener los Juzgado de Violencia sobre la Mujer, las plazas y la constitución de los juzgados.



Además de las competencias en el orden civil y penal, la Ley, en su capítulo IV, menciona las medidas judiciales de protección y seguridad, según las cuales el Juez competente deberá pronunciarse siempre sobre la pertinencia de la adopción de las medidas cautelares y de aseguramiento, orden de protección, protección de datos de la víctima, medidas de salida del domicilio, alejamiento o suspensión de las comunicaciones, la patria potestad o de la suspensión del régimen de visitas a sus descendientes y tenencia y porte de armas.

Las medidas de esta Ley se completan con la creación del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, encargado de la supervisión y coordinación del Ministerio Fiscal en este aspecto, así como mediante la creación de una Sección equivalente en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales a las que se adscribirán Fiscales con especialización en la materia.

## NORMATIVA Y PLANES

### *Legislación General*

- Constitución Española (Artículos 9 y 14)
- LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. (BOE de 29/12/2004)
- LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. (BOE de 23/03/2007)

### *Igualdad*

#### **Normativa sobre igualdad**

- REAL DECRETO 1791/2009, de 16 de diciembre, por el que se regula el régimen de funcionamiento, competencias y composición del Consejo de Participación de la Mujer (BOE de 16/12/2009)
- REAL DECRETO 1615/2009, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión y utilización del distintivo "Igualdad en la Empresa". (BOE de 03/11/2009)
- LEY 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida. (BOE de 07/10/2009)
- Carta Europea para la Igualdad Regional y Local
- REAL DECRETO 300/2009, de 6 de marzo, por el que se crean la Medalla y la Placa a la Promoción de los Valores de Igualdad. (BOE de 28/03/2009)

- REAL DECRETO 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad (BOE de 07/03/2009).
- REAL DECRETO 297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad compartida en las explotaciones agrarias. (BOE de 26/03/2009)
- REAL DECRETO 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural (BOE de 21/03/2009)
- LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. (BOE de 23/03/2007)
- Directiva 2006/54/CE, de 5 de julio, sobre Igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres
- Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso de bienes y servicios y su suministro
- LEY 30/2003, de 13 de Octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno. (BOE de 14/10/2003)

### Planes de igualdad

- Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual
- Plan estratégico de igualdad de oportunidades (2008-2011)
- Plan de acción del Gobierno de España para la aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2000) sobre mujeres, paz y seguridad

### Violencia de género

#### Normativa sobre violencia de género

##### Normativa con rango de ley

- LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. (BOE de 29/12/2004)
- LEY 27/2003, de 31 julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica. (BOE de 01/08/2003)

- LEY 35/1995, de 11 diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. (BOE de 12/12/1995)

#### REALES DECRETOS

- REAL DECRETO 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. (BOE de 07/02/2009)
- REAL DECRETO 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se regula el programa de inserción socio laboral para mujeres víctimas de violencia de género. (BOE de 10/12/2008)
- REAL DECRETO 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funcionamiento del fondo de garantía del pago de alimentos. (BOE de 14/12/2007)
- REAL DECRETO 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo. (BOE de 05/12/2006)
- REAL DECRETO 253/2006, de 3 de marzo, por el que se establecen las funciones, el régimen de funcionamiento y la composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. (BOE de 14/03/2006)
- REAL DECRETO 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. (BOE de 17/12/2005)
- REAL DECRETO 515/2005, de 6 de Mayo, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de localización permanente, de determinadas medidas de seguridad. (BOE de 07/05/2005)
- REAL DECRETO 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. (BOE de 07/01/2005)
- REAL DECRETO 996/2003, de 25 de julio, Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita. (BOE de 07/08/2003)
- REAL DECRETO 738/1997, de 23 mayo, por el que se aprueba el reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. (BOE de 27/05/1997)

#### Planes sobre violencia de género

- Plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género
- Plan de atención y prevención de la violencia de género en la población extranjera inmigrante, 2009 - 2012

## 6. PREOCUPACIÓN INSTITUCIONAL POR LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS

Tanto la preocupación institucional por la violencia familiar contra los niños, como “el concepto de maltrato infantil” como fenómeno psicosocial hay que entenderlos dentro de un determinado contexto social-cultural. En éste dos aspectos son importantes: los avances en el conocimiento científico sobre las necesidades de los niños y el conjunto de normas y valores sobre la infancia. Estos valores poco a poco se van reflejando en el derecho; así, en los últimos diez años asistimos a la emergencia de recomendaciones y normas que sancionan a la infancia como sujeto de derecho.

En 1985, el **Comité de Ministros del Consejo de Europa** recomendó a sus treinta y tres Estados miembros “*revisar su legislación sobre el poder castigar a los niños y niñas*”, con el fin de reducir el castigo físico.

Independientemente de que el código penal contemple aspectos punitivos ante el uso de violencia aunque no se produzca lesión, tenemos como marco de referencia en la protección de la infancia la **Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas**, el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España en 1990. Dicha Convención tiene como fundamental principio el respeto de la dignidad de los niños y las niñas. Así, en el punto 1 del Artículo 19. de la Convención insta a los Estados a tomar medidas “*para proteger a los niños y niñas de cualquier forma de violencia física y mental*” y, prohíbe “*el uso de cualquier forma de violencia, abuso, descuido y tratamiento o castigo degradante o inhumano*”; contribuyendo así a configurar un contexto cultural y de valores en el que se rechaza el maltrato a la infancia.

En 1990, una recomendación, relacionada con las medidas sociales concernientes a la violencia en la familia, hacía hincapié en la “condena general del castigo físico y otras afrontas de trato degradantes común a través de la educación, y en la necesidad de una educación no violenta (R90/2). Y en 1993, la recomendación sobre los aspectos médico-sociales del abuso sexual urgía a los Estados a “minimizar los niveles de violencia en la sociedad, así como las prácticas educativas que recurren a la violencia”.

Esta creciente sensibilización frente al problema del maltrato a la infancia ha venido acompañada de la superación de una concepción sólo material de los malos tratos, de modo que ahora se entiende por éstos “toda acción u omisión no accidental que comprometa o impida la seguridad de los niños y la satisfacción de sus necesidades físicas o psicológicas básicas” (Jiménez Morago, 1993).

En el Estado español la **Constitución de 1978** declara, en su Art.15, que “todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni penas o tratos inhumanos o degradantes”. Este planteamiento constitucional viene a anular el derecho de corrección de los padres a los hijos tal como se contemplaba en el antiguo **Ordenamiento Jurídico**. La facultad de castigar a

los hijos, otorgada a los padres en el Código Civil español, responde a una concepción de la patria potestad como un poder desmesurado que obliga a los hijos a tributar a sus progenitores "respeto y reverencia siempre". La **Ley de 13 de mayo de 1981** supuso ya un cambio radical en esta idea de patria potestad procedente del ordenamiento romano. Desde esta nueva Ley prevalece la idea de que la patria potestad ha de ser ejercida en beneficio de los hijos.

También en el **Código Penal** se introduce en el año 1983 una importante modificación: sancionar a los padres que usan la violencia para corregir a sus hijos. Hasta esta fecha, el padre que causaba lesiones a su hijo "excediéndose en su corrección" no era condenado. En 1989, el Código Penal prohíbe ejercer de forma habitual y con cualquier fin la violencia física sobre los hijos; los malos tratos habituales adquieren ahora la consideración de delito. En la reforma del Código Penal de 1995 se estipula que "quien habitualmente ejerza violencia física sobre los hijos será castigado con penas de prisión de seis meses a tres años".